

EL SABER SOBRE EL CRIMEN: RUDOS CONTRA EXPERTOS EN LA CIUDAD

Pablo Piccato
Columbia University

La lucha libre mexicana es una batalla mítica entre “los rudos” (panzones, marrulleros, abiertamente malos) y “los técnicos” (atléticos, leales, deportivos). Una mirada panorámica al campo de los conocimientos actuales sobre el crimen en América Latina recuerda las batallas campales de la Arena Coliseo: enfrentamientos dramáticos, acrobacias, árbitros corruptos y resultados siempre discutibles. Si quisiéramos ordenar el campo del saber contemporáneo sobre el crimen y sus soluciones podríamos dividir los participantes en rudos y técnicos.

Los rudos piensan que la única manera de resolver el problema del crimen es con mano dura. Algunos de ellos, invistiéndose a sí mismos como representantes de la sociedad civil, piden el retorno a la pena de muerte o por lo menos el uso de castigos más largos y efectivos contra secuestradores y otros criminales peligrosos. Su autoridad es difícil de contradecir porque, al menos Juan Carlos Blumberg en Argentina y los dirigentes de “México Unido contra la Delincuencia”, han sufrido en carne propia los efectos de la violencia criminal y la ineficacia policial. En algunos casos, como en el de las “autodefensas” colombianas, este sentido de indignación se traduce en miles de ejecuciones caracterizadas por la vindicta, la ideología y los negocios ilegales, más que por la búsqueda de justicia. Cercanos a estas actitudes se encuentran miembros de las clases políticas que adoptan la retórica de la mano dura para obtener resultados electorales, Álvaro Uribe, en Colombia, el más famoso. Rara vez acompañan sus acciones con miras de largo plazo para reformar las instituciones penales o neutralizar las causas del crimen. Un ejemplo de esta rudeza es la negligencia ante la violencia en cárceles atestadas, el arresto de los que llevan tatuajes, o la falta de persecución contra los asesinatos de menores, como sucede en Honduras en nombre de las luchas contra las pandillas. Un tercer luchador en el bando de los duros son los medios de comunicación, particularmente la televisión,

que reportan los casos criminales con una inimitable combinación de gazar-mañería y morbo. Noticieros y programas especiales yuxtaponen imágenes brutales de los efectos de la violencia con entrevistas a víctimas en sus momentos de mayor fragilidad, seguido de drásticas recomendaciones para aumentar el castigo contra “los criminales” y sus cómplices corruptos.

Los técnicos, que sería más correcto en este contexto llamar expertos, son los académicos, policías, asesores y otros profesionales que dicen monopolizar el conocimiento sobre un tema tan vagamente definido como lo es el crimen. Los expertos evitan caer en los estados emocionales de los rudos, aunque no les molesta cuando sus investigaciones llevan a las mismas conclusiones draconianas. Los caracteriza, por contraste, tener de su lado la autoridad de la ciencia. Debido a que la criminología como disciplina académica es relativamente débil en América Latina (comparada con el grado de profesionalización y recursos que tiene en Estados Unidos o Inglaterra) la mayoría de los expertos en el crimen provienen de las ciencias sociales pero también del derecho, la economía, y la psicología. El instrumento más poderoso en sus manos son las estadísticas del crimen, que demuestran las tendencias del presente y pueden evaluar, aunque sea a corto plazo, la eficacia de las políticas contra el crimen. De esta manera, los expertos son árbitros de lo que sirve, pero también proveedores de ideas útiles en el plural ya que, como ellos bien lo saben, no hay ninguna receta única para solucionar o siquiera aliviar el problema de la criminalidad.

Debido a que la inseguridad se ha convertido en una de las prioridades de los votantes latinoamericanos, y de que los políticos no tienen más remedio que hacer caso a las encuestas de opinión, el conocimiento experto sobre el crimen se ha convertido en una industria floreciente a través de *think tanks* u organismos no gubernamentales que ofrecen diagnósticos, parámetros y programas. El caso más publicitado es el de la asesoría ofrecida por la compañía del ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, al gobierno de la ciudad de México. A Giuliani le cupo en suerte estar a cargo de la ciudad de Nueva York cuando había dinero y las tasas de crimen bajaban en todo Estados Unidos, debido sobre todo a razones demográficas. Sin embargo hizo buen negocio vendiendo consejos simples y fuera de contexto, como la “tolerancia cero”, que las universidades y otras instituciones académicas todavía no pueden contrarrestar de manera consistente. Las recetas suenan a mano dura y complacen a los votantes rudos, además de agregar valor, por lo menos en el centro de la ciudad de México, a programas de renovación edilicia en zonas antes “peligrosas”.

No todo el panorama es tan deprimente. Las investigaciones académicas y periodísticas sobre el problema de la criminalidad en América Latina crecen en número y calidad. Se trata en su mayoría de estudios que responden

a preguntas genuinas y que se llevan a cabo no solo de forma desinteresada sino también con escaso apoyo oficial. Pero, como campo académico incipiente, estos trabajos no han adquirido una clara autonomía con respecto a las necesidades siempre urgentes del Estado ni una voz propia que los distinga del ruido de la indignación pública contra el crimen y la impunidad. Coordinar agendas de investigación, discutir resultados más allá de las audiencias de siempre constituyen ahora el siguiente paso, por lo menos para los expertos que aspiran a más que vender productos al Estado.

Rudos y expertos están de acuerdo en que el crimen en los últimos años va en aumento y nunca ha sido tan peligroso. Lo demuestran los datos estadísticos (las altísimas tasas de homicidio, por ejemplo) tanto como las imágenes amenazadoras de las ciudades latinoamericanas. La premisa, no obstante, es dudosa. Latinoamérica ha sido una región de alta criminalidad durante todo el siglo pasado. Al menos en México, según mi propio trabajo, las tasas criminales eran más altas a principios del siglo XX. Todo indica que el aumento (real y drástico) de los años ochenta y noventa comienza a nivelarse. Las ciudades siempre han tenido zonas “peligrosas” que sus habitantes, sin embargo, han sabido no solo navegar sino también aprovechar como parte de la economía urbana, desde los “mercados de ladrones” coloniales hasta las zonas de contrabando (el barrio de Tepito en la capital mexicana) o de venta de drogas (como las favelas cariocas). Lo cierto es que, más allá de los números, como lo dice Goldstein, “la incapacidad del Estado (...) para dar seguridad a sus ciudadanos es una de las causas más fuertes de la deslegitimización del Estado en las naciones andinas de hoy”.¹

Los dos libros que aquí se reseñan vienen a complicar de una manera saludable esta imagen del saber sobre el crimen como pancracio. Con distintos métodos y objetos de estudio, aunque producidos en el contexto de la academia norteamericana, ambos demuestran que una visión centrada en el Estado (en lo que sus instituciones dejan de hacer o deben de hacer para controlar el crimen) no responde a la realidad de las ciudades latinoamericanas. Tanto Enrique Desmond Arias, al estudiar el narcotráfico en Río de Janeiro, como Daniel M. Goldstein, al examinar linchamientos en un barrio de Cochabamba, identifican la complejidad de actores e intereses reunidos por el problema del crimen. El Estado es un actor entre otros, generalmente más notable por su ausencia o su colaboración con los criminales que por su papel punitivo o preventivo.

1. Daniel M., Goldstein and e-brary Inc., *The Spectacular City Violence and Performance in Urban Bolivia*. In *Latin America Otherwise*, Durham, Duke University Press, 2004, p. 23.

El hallazgo no es ninguna sorpresa para cualquiera que haya vivido en Latinoamérica pero sí resulta significativo como punto de partida para discutir el crimen de una manera racional y eficaz. Sabemos, gracias a trabajos como estos, que no sirve de nada pensar el crimen como un enfrentamiento entre el bien y el mal, como lo ven los rudos, o como el producto de una población naturalmente distinta del resto de la sociedad, a saber, “los criminales”, como tienden a argumentar los expertos, siguiendo las tradiciones criminológicas del siglo XIX. El crimen es una relación en la que varios actores, con distintos intereses, se asocian, usualmente con fines predatorios (por eso hay víctimas) pero siempre sobre la premisa de que puede haber múltiples beneficiados (por eso hay cómplices). No hay una solución, por lo tanto, sino diversas estrategias para destrenzar esos intereses, aumentar el costo moral o económico de la transgresión, reintegrar a los transgresores y restaurar la dignidad y seguridad de las víctimas –aunque el orden de prioridad de estos objetivos también es objeto de la lucha libre.

Un cambio epistemológico es fundamental en esta literatura reciente sobre el crimen: a diferencia del saber heredado de la criminología decimonónica, el lugar privilegiado de la observación ya no es la cárcel. La rehabilitación, como lo ha señalado David Garland, ya pasó de moda, y es unánime el consenso de que la cárcel produce más crimen y recrea las desigualdades y violencias del mundo exterior. En estas nuevas investigaciones el escenario privilegiado son las ciudades latinoamericanas, con su combinación de extrema desigualdad, debilidad estatal, y libertad de movimiento. El crimen, en trabajos sólidos e imaginativos como los que aquí se reseñan, no es el patrimonio de barrios donde viven “los criminales” sino el resultado de factores locales y globales que convergen en centros urbanos de gran dinamismo.

Goldstein muestra que la seguridad es un problema más agudo para los que tienen menos recursos y menos acceso al apoyo del gobierno, como los colonos del barrio marginal de Villa Sebastián Pagador, en Cochabamba. *Spectacular City* es el producto de la etnografía de una comunidad urbana que, como todos los proyectos ambiciosos, se convirtió en algo más en el proceso de investigarla. Goldstein no oculta sino que usa con buen efecto su sorpresa de encontrar la violencia cuando andaba recolectando datos sobre tradiciones y fiestas públicas. La sorpresa no consiste solamente en el hallazgo de que una fiesta acabara en golpes, sino la manera casi ritualizada con que la violencia se utilizó, y luego se racionalizó dentro de la comunidad y hacia afuera. La anécdota se convirtió en el eje del libro. Goldstein traza la historia de la creación de ese barrio marginal en las afueras de Cochabamba y de la manera en que la identidad étnica dio cuenta del origen, así sea mítico, de los pobladores y se convirtió en la razón para orga-

nizar fiestas en las que se recreaba, o reinventaba, esa misma identidad. Los recursos y la organización invertidos en la fiesta de San Miguel tienen sus ganancias: aparte de consolidar un liderazgo que solo se puede definir como democrático en un sentido muy lato, la fiesta crea una imagen pública, una identidad y una voz para la Villa Sebastián Pagador ante el gobierno urbano de Cochabamba y los medios de comunicación. No es lo mismo negociar por transporte, agua y electricidad si el destino de esos fondos alberga un pedazo del patrimonio cultural de la nación.

Buena parte del libro es una historia de esa política en pequeña escala, comenzando por el trazo mismo de la ciudad de Cochabamba y continuando con el poblamiento y definición de Villa Sebastián Pagador. Los historiadores de la colonia y el siglo XIX otorgan a la noción de vecindad una importancia cada vez mayor cuando se trata de entender la política antes de la ciudadanía universal –conquistada en América Latina solo en el siglo XX, y a duras penas–. Ser vecino daba voz y derechos a los habitantes de una ciudad o pueblo. En una ciudad del siglo XX, rápidamente inflada por la migración interna, los automóviles y el populismo, la vecindad sobrevive pero adquiere nuevas dimensiones. Las instancias de representación y negociación proliferan, desde arriba y desde abajo: programas federales, gobierno estatal y urbano, organizaciones intermedias de gestión, asociaciones de vecinos. Cochabamba no es el ejemplo más prestigioso de diseño urbano en la región (no tiene la coherencia de Brasilia, las avenidas de Buenos Aires, el prestigio arquitectónico colonial de la ciudad de México, o la *belle époque* de Río de Janeiro) pero es también una ciudad letrada, escenario de una larga, nunca terminada negociación entre el prestigio de las ideas de los letrados y voces disonantes que poco a poco van adquiriendo el derecho a usar su propio vocabulario. La modernidad de los urbanistas de Cochabamba, como en otros casos, es más radical en la medida de que los gobiernos urbanos carecían de recursos y continuidad para ponerlos en práctica. La otra modernidad, la de la mayoría de los pobladores, reivindicaba nociones liberales de ciudadanía contra la utopía de ciudades funcionalmente segregadas.

Ángel Rama no concibió la violencia como parte central de la historia de la ciudad letrada. Goldstein, respaldado por una tradición etnográfica urbana que se remonta a Oscar Lewis, demuestra que los usos formales e informales de la violencia también tienen una función expresiva en el desarrollo de espacios y actores urbanos. La anécdota con que comienza el libro se vuelve su eje cuando, luego de la historia de gestiones y festivales folclóricos, un capítulo (que a este reseñista le supo a poco) examina la práctica de los linchamientos en Villa Sebastián Pagador. Goldstein retrata sin un ápice de romanticismo la crueldad de la multitud que se define como víctima con-

tra los transgresores indefensos. Un pequeño robo, sin violencia, da lugar a rituales dolorosos y humillantes, que a veces matan, pero por los que nadie toma responsabilidad personal.

El linchamiento de “extraños” es una práctica que sigue viva en muchos lugares del continente. Los expertos tienden a verla como expresión del barbarismo popular, una contraparte grotesca de la justicia, o una forma irracional de la prevención. Tradiciones populares, justicia y prevención son, en efecto, algunos de los argumentos que usan los pobladores de Sebastián Pagador y de otros lugares, urbanos y rurales, para justificar linchamientos. Pero observar estas prácticas, aunque difícil, revela otros significados. Goldstein propone que los linchamientos son un *performance* que demuestra la unidad de una comunidad asediada por fuerzas centrífugas como la desigualdad, la migración, las privaciones de la infraestructura. El blanco de la violencia son fuereños que transgreden la supuesta armonía colectiva de un barrio en el que, supuestamente, los vecinos no se roban o agreden nunca. La acción colectiva violenta y espectacular también es una manera eficaz de aparecer en los periódicos y la televisión, y recordarle a la opinión pública que barrios marginales todavía existen, que la ciudad no los puede dar por supuesto como proveedores de mano de obra barata. Los beneficios pueden ser tangibles, aunque breves: los políticos y los comentaristas reconocen las carencias de esas zonas, prometen acciones, mandan patrullas, reactivan gestiones. Más allá de eso, según Goldstein, lo que estas acciones reclaman es una ciudadanía plena para sectores ignorados por el Estado neoliberal, privados de un sistema judicial legítimo. Y el costo de los linchamientos es menor cuando, siguiendo la retórica de rudos y expertos, los que lo pagan son “criminales” –una forma diferente de la humanidad–. Hay, por supuesto, un costo oculto que es más difícil de evaluar en el corto plazo: el aislamiento, las identidades artificiales pero estrechas que dificultan interacciones con otros actores no estatales, la ausencia de democracia justificada por la unanimidad.

Los linchamientos, igual que los festivales folclóricos, sirven para establecer una negociación con el Estado y una visibilidad en la esfera pública que puede traducirse en recursos. Lo definitivo aquí es la ausencia de protección policial, la negligencia más que la hostilidad del Estado. Goldstein, sin embargo, pone esta negociación en un contexto histórico más profundo. La tradición colonial de policía y buen gobierno es un instrumento clave para estos habitantes urbanos. Además de cifrar los derechos implícitos en el carácter de “vecino”, policía y buen gobierno significa que la seguridad es tanto una obligación del gobierno como un imperativo colectivo de orden moral tanto como organizativo.

Esta tradición no es lo mismo que la mano dura ante el crimen que proponen los rudos –pena de muerte, largas sentencias de cárcel, humillación y exclusión de “los criminales”–. La vecindad, desde su origen colonial, se finca en la exclusión de los fuereños; pero desde entonces, también, incluye formas selectivas de la permeabilidad: con el tiempo, el matrimonio, el dinero, o simplemente la paciencia, el estatus de vecino podía adquirirse. No era una exclusión puramente racial o étnica, sino la expresión de los vínculos que crea un lugar. Los rudos, en cambio, combinan el castigo excluyente con la privatización de los espacios urbanos y de la seguridad. Los barrios bardeados y protegidos en ciudades como Sao Paulo han sido retratados y explicados magníficamente por Teresa Caldeira en *City of Walls*. Las divisiones urbanas en las ciudades latinoamericanas contemporáneas se montan sobre una retórica (*the talk of crime*, según Caldeira) en la que “el criminal” es el otro por excelencia, racial y moralmente pero, sobre todo, espacialmente: el que vive lejos, en las favelas de Brasil, las villas miseria de Argentina, las ciudades perdidas de México. Las bardas y los puestos de control que rodean los suburbios aspiran a demostrar la teoría que los respalda (es decir, que los criminales se pueden identificar y dejar fuera) pero el crimen también sucede en esos espacios privatizados. En la lucha permanente por controlar percepciones y explicaciones en la esfera pública, los linchamientos demuestran el deseo compulsivo de controlar espacios comunes, y el fracaso de los pobres por mantener la transgresión en un ámbito privado como lo hacen los moradores de los “buenos” suburbios.

En lugar de identificar geografías del peligro criminal, el libro de Goldstein nos recuerda que el problema del crimen es experimentado con la misma urgencia y dramatismo que cualquiera de las demás carencias que definen la vida cotidiana para la mayoría de las poblaciones urbanas latinoamericanas. La marginalización es un producto político, no un atributo que defina a ciertos grupos sociales. Los rudos y los expertos de Cochabamba definieron a los habitantes de Villa Sebastián Pagador como delincuentes cuyo primer botín fue el de lotes baldíos. Pero, poniendo entre paréntesis a la ley como único marco para entender lo legítimo, Goldstein muestra cómo el prevenir o atacar el problema del crimen es un punto de referencia central en el impulso organizativo que, en el caso de Cochabamba, convirtió a un erial en una comunidad llena de dinamismo y capaz de producciones culturales originales. Su argumento en este sentido hubiera sido más fuerte si el libro hubiese incluido un análisis de otras formas de lidiar con la transgresión, menos espectaculares pero sin duda frecuentes, en la esfera doméstica, por ejemplo. Pero no se puede pedir todo. Su propuesta es mostrar la íntima conexión entre crimen y ciudadanía. Si los expertos y los rudos tuvieran en cuenta ese punto de referencia común les sería más fácil darse cuen-

ta de que el Estado no es el único al que le pueden hablar. La sociedad civil puede ir más allá de la vindicta en el plano emotivo y, como en el caso estudiado por Goldstein, adquirir un liderazgo práctico en materia de seguridad.

Desmond Arias también llevó a cabo una cuidadosa y extensiva investigación de campo. No es fácil animar a los informantes a hablar sobre actividades ilegales. Arias tuvo que tomar notas breves y crípticas después de las entrevistas para evitar que, si la policía le quitaba su cuaderno, alguien pudiera ser perseguido. En vista de las disputas internas de las favelas en las que realizó su investigación, la información podía ser peligrosa si caía en las manos equivocadas. Más de una vez le tocó caminar demasiado cerca de armas y balazos. Pero no hay como pasar un buen rato en un lugar para conocer las prácticas criminales y sus efectos sobre la vida cotidiana. La ciencia política tiende a recompensar la comparación entre sociedades distintas y lejanas, y la formulación de modelos de amplia validez. El trabajo etnográfico no parece buena idea, entonces, porque toma tiempo y ofrece resultados específicos. *Drugs & Democracy*, sin embargo, muestra que no es necesario optar entre la riqueza empírica y la solidez teórica.

Río de Janeiro es un lugar de paso para la cocaína que va de los Andes a Europa y otras regiones. El puerto es uno de los más grandes del continente, el turismo es intenso, y las favelas ofrecen lugares de difícil acceso para la policía. Es en las favelas donde los traficantes pueden guardar y preparar la droga para su exportación. Las favelas, cercanas al centro de la ciudad, también son un buen lugar para la venta al menudeo. Aunque el narcotráfico forma cadenas globales, sus efectos son siempre locales. Es fácil pensar que los traficantes son actores poderosos, con recursos y contactos ilimitados, pero la investigación de Arias revela las distorsiones derivadas de pensar que los actores “globales” tienen mayor autonomía que los “locales”. En realidad, siempre son las dos cosas y nunca son tan poderosos como los pintan.

Los narcotraficantes de las favelas de Río son débiles, sostiene Arias, pues dependen de sus vínculos con otros actores locales para llevar a cabo sus negocios. Necesitan, por ejemplo, contar con cierta simpatía de parte de los vecinos para realizar transacciones en la zona. Con el fin de generar apoyo, pagan fiestas o patrocinan equipos de fútbol –aunque el deporte tiene sus riesgos: dos favelas entraron en guerra a raíz de que un delantero mató a un arquero que le detuvo un penal, con una pistola que traía en la cintura–.² Pero, en general, lo mejor para el negocio es controlar otros tipos de crímenes en el barrio. El miedo, sin embargo, no es suficiente para tener

2. Desmond Enrique Arias, *Drugs & Democracy in Rio de Janeiro: Trafficking, Social Networks, & Public Security*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2006, p. 133.

éxito: si los vecinos deciden que los traficantes abusan de su poder pueden crearles problemas. Las asociaciones vecinales, por ejemplo, pueden ser intermediarios frente a las autoridades municipales para facilitar o dificultar el narcotráfico. Cuando el negocio del crimen se mezcla con la política barrial, según Arias, el resultado siempre es una pérdida en términos de los derechos civiles. La evidencia es elocuente en el sentido de que, si se trata de estas redes ilegales, una mayor actividad de la sociedad civil no necesariamente lleva a una mayor fuerza de las instituciones democráticas.³

Lo mismo con la policía. Arias revela otra equivocación en la percepción común del negocio: la relación entre los narcotraficantes y la policía es violenta, cambiante y costosa.⁴ Los policías extorsionan a los vendedores; los secuestran y solo los sueltan después de que pagan un rescate; les decomisan la droga y luego la venden a otros distribuidores; les cobran cuotas de protección. A veces los acuerdos de este último tipo se rompen y hay violencia. Los traficantes tienen armas y pistoleros a sueldo, pero es la policía la que mata con más frecuencia —en 1993 murieron veintiún civiles víctimas de granadas y balas que usó la policía para ponerse a mano con una banda—. Como el negocio de las drogas es ilegal, los traficantes solo pueden recurrir a la violencia para ajustar cuentas, es decir, cuando algún actor falta a los términos de un contrato. Como la extorsión policial es también un crimen, la violencia directa es mejor para criminales y policías que el uso de la ley para presionar a clientes y socios. A diferencia de Cochabamba, aquí no se trata simplemente de un Estado débil. La policía brasileña es heredera directa del autoritarismo y la intervención militar. Su brutalidad y la deshumanización que implica solo pueden entenderse plenamente como heredadas del racismo y otras ideologías del siglo veinte. Más que por su debilidad, la causa de que los pobladores de las favelas rechacen la intervención de la policía y el Estado es su uso selectivo de los recursos: en los momentos y los lugares que les interesa intervenir lo hacen, pero casi nunca operan sobre la premisa de un derecho universal de los ciudadanos a la seguridad.

Arias propone que no es suficiente entender estas interacciones en términos de las consabidas dicotomías legalidad/ilegalidad, Estado/sociedad civil. En realidad, las favelas de Río son el lugar de redes ilegales donde actores con diversos objetivos encuentran circunstancias que favorecen sus alianzas. Esto da lugar a vínculos caracterizados por la flexibilidad que posibilitan transacciones e incluyen nuevos actores a pesar de la posibilidad constante de la violencia.⁵ Las asociaciones de vecinos, como en Cochabamba,

3. *Ídem*, p. 96.

4. *Ídem*, p. 114.

5. *Ídem*, pp. 40-41.

quieren servicios e infraestructura, seguridad y respeto para los habitantes. Los narcotraficantes quieren asegurar sus ganancias y minimizar los riesgos. La policía quiere su tajada, pero también debe responder a las órdenes de las autoridades elegidas, que quieren los votos de las favelas. No se trata, en suma, de un sistema fundamentalmente determinado por el tráfico de drogas: la corrupción y el negocio que éstas generan no es, como la pintan los rudos, una enfermedad moral que contagia a todos los sectores de la sociedad sino una inyección de armas y dinero con efectos específicos en la geografía urbana. La amenaza de violencia no es la única consideración en las decisiones de los actores colectivos e individuales; Arias documenta la tolerancia causada por la costumbre pero también el valor alimentado por el hartazgo. El crimen, en suma, no crea nítidas divisiones dentro de la sociedad sino que, por el contrario, define ciertos bienes que pueden generar colaboraciones o conflictos: se trata de relaciones criminales, pero no de actores esencialmente definidos por el delito. Arias dista de sugerir que las drogas tienen un resultado neto benéfico: aunque los actores de la sociedad civil, como los líderes vecinales, pueden utilizar los recursos generados por las drogas en beneficio de la comunidad, generalmente lo hacen a costo de una menor democracia y un respeto selectivo de los derechos de los vecinos. Las favelas donde el tráfico es más intenso tienden a aislarse, haciendo más difícil la entrada de otros actores de la sociedad civil (como organizaciones no gubernamentales que traen recursos y facilitan negociaciones).

Solo las intervenciones que tienen en cuenta la naturaleza de estas redes pueden disminuir el nivel de violencia. Arias cita varios episodios con buenos resultados pero de corta vida. La pura represión, sin embargo, jamás sirve. Solo los actores políticos que partan de la premisa de que los intereses de actores legítimos e ilegales están estrechamente conectados podrán lograr entendimientos que resulten en un aumento de la seguridad. Los vecinos, y en particular sus representantes, solo dejarán de solapar a los traficantes cuando vean que a cambio no perderán el capital social y político que les permite seguir funcionando a pesar de la negligencia histórica del Estado hacia las favelas.

Estos dos libros, y otros con espíritu semejante pero enfoques distintos aparecidos en años recientes, marcan un rumbo positivo en los estudios sobre el crimen en América Latina. Los rudos siguen produciendo indignación y amarillismo. Nunca van a faltar consumidores para esa manera de entender el crimen. Los expertos también son productivos, con estudios donde la seguridad es el problema y el objetivo es mejorar la administración del desorden para dejarlo en niveles manejables, por más que sea al costo de olvidar las explicaciones. Las estadísticas son un síntoma que se convierte en substancia: las tasas suben o bajan, quién sabe por qué, pero dan lugar

a consecuencias políticas. Si de alguna forma se les puede correlacionar con políticas públicas (cero tolerancia, operativos antidrogas, mayores penas, lo que sea) santo y bueno: los números dan algo qué hacer y una forma de medir la efectividad de lo que se hace.

Contra estas visiones del crimen, Goldstein y Arias proponen miradas detenidas, que comprometen personalmente al investigador con el objeto de estudio sin crear el vínculo paternalista de “dar voz” a los marginados o idealizar la brutalidad. Pasar largas temporadas en una ciudad lejana no da lugar a fórmulas cuantificables pero sí a explicaciones densas, abiertas a la discusión y, por eso mismo, potencialmente más útiles. Ambos autores rehúyen establecer una posición de autoridad para el observador de la ciudad: el objeto está demasiado fragmentado como para pretender conocerlo totalmente. El crimen es difícil de definir pero lo que es cierto es que está hecho de relaciones que generalmente son públicas, a veces conflictivas y, aunque cueste admitirlo, productivas.



BIBLIOGRAFÍA

- Arias, Desmond Enrique,
2006 *Drugs & Democracy in Rio de Janeiro: Trafficking, Social Networks, & Public Security*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- Goldstein, Daniel M., and e-brary Inc.,
2004 *The Spectacular City Violence and Performance in Urban Bolivia. In Latin America otherwise*, Durham, Duke University Press.